Imprimir

En Colombia la agitación política se ha vuelto una constante y los escándalos ligados a la corrupción y a la prepotencia de los políticos pan de cada día. El último acto de gran envergadura ha tenido como protagonista a la exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a raíz de la irregular adjudicación de un contrato para llevar internet a colegios de territorios apartados del centro del país que derivó en un desgaste político destinado a consumarse en una moción de censura en el Congreso.
El causante del mencionado escándalo fue la firma Centros Poblados envuelta en garantías y firmas falsas, contratistas con antecedentes delictivos, paraísos fiscales y falta de experiencia suficiente para llevar a buen puerto la tarea encomendada.

El desenlace del sainete protagonizado por la ministra comenzó desde diciembre de 2020 cuando la periodista Paola Herrera de la W radio denunció una serie de irregularidades que la ministra desmintió asegurando que todo estaba bien. Inicialmente el presidente Duque respaldó a su ministra a quien calificó de “persona honorable”, pero el desgaste para el Gobierno se fue volviendo insostenible ante la presión ciudadana en redes sociales, la creciente denuncia de anomalías en los medios de comunicación y un inocultable incumplimiento por parte del contratista.

La decisión de Duque de pedirle la renuncia a su ministra fue criticada por tardía, en razón de la situación que se encuentra tras la crisis política desatada por el estallido social que provocó la propuesta de reforma tributaria del exministro Carrasquilla, su baja popularidad y su indiferencia hacia lo que reclama la gente.

La renuncia de Karen Abudinen fue la forma de evitar una probable destitución en el Congreso de la República ante el anuncio del Partido Liberal de votar contra la ministra en una acción que ha sido interpretada como la necesidad de no verse envuelto en acciones que hipotequen votos a su favor en el proceso electoral que se avecina.

Aunque la ministra se defendió argumentando que había sido ella quien tomó acciones contra Centros Poblados, la realidad es que su acción fue posterior a las denuncias públicas y

hoy la Fiscalía avanza en una investigación contra los contratistas compelidos a devolver 70 mil millones de pesos que, al parecer, se han perdido, mientras la misma Abudinen es investigada por la Procuraduría para determinar si tuvo responsabilidades disciplinarias.

En materia política, la gran pregunta que se hacen muchos es en qué medida puede afectar a Duque la salida de Karen Abudinen del Mintic y qué repercusiones puede tener en el juego electoral.

Para responder el interrogante que se abre y comprender el comportamiento de los actores en escena, es importante precisar el tipo de vínculos que atan el Presidente a distintas fuerzas políticas y a estas entre ellas.

De todos es conocido que Iván Duque llegó a la presidencia aupado por las maquinarias políticas a las que ha entregado el gobierno repartiendo ministerios y cargos públicos en el marco de una lógica de lealtades personales gestadas por relaciones clientelistas controladas por los clanes políticos que tienen el poder de facto y que rivalizan entre ellos.

La salida del ministerio de Karen Abudinen ha sido interpretada como un golpe a la casa Char de la costa atlántica que apadrina a la exministra y como una clara muestra de la ruptura interna de Cambio Radical porque uno de los frentes de ataque contra la exministra lo lideró Germán Vargas Lleras desde sus columnas de opinión en el diario El Tiempo. La dimisión de Abudinen no solamente le quita una importante cuota burocrática a los Char sino que también los deja con mala imagen para las elecciones locales de 2022.

El caso de corrupción en el Ministerio de las Tecnologías también empeora la imagen de Iván Duque quien desde un principio apoyó a la ministra y nunca le reprochó públicamente los errores que cometió y permitieron que se perdieran los avances entregados a Centros Poblados, a pesar de todas las pruebas que aportaron los medios de comunicación. En ese orden de ideas es válido pensar que el incidente le hace perder gobernabilidad a Duque quien, para recuperar algo de lo perdido ante la opinión pública, dará más juego a las maquinarias políticas para terminar su presidencia sin mayores sobresaltos.

Algunos políticos afirman cínicamente que, si bien la gobernabilidad se afectará, con un gobierno de salida el daño no será tan grave. Es posible que así sea. Lo que no se puede negar es que ante la carencia de moral que conduce a no reconocer la responsabilidad política se deteriora la legitimidad y se corre el riesgo de incrementar las relaciones clientelistas. En efecto, el clientelismo, como se ha visto, acaba a menudo en corrupción, pero esta, a su vez, incentiva el clientelismo pues propicia las redes de amigos y clientes que colonizan las instituciones públicas. Esta dinámica, en un contexto de lucha por el poder lleva a un permanente abuso de las instituciones públicas con empleados incompetentes pero leales al patrón que deterioran la imagen del Estado.

Rubén Sánchez David, Profesor Universidad del Rosario

Foto tomada de: Caracol Radio